

Categorías	Indicadores	Variables
CAPÍTULO V. SITUACIÓN POLÍTICA		
1. Organización y participación	1. Lista de organizaciones	1. Partidos políticos 2. Organizaciones sociales 3. Asociaciones cívicas
	2. Formas de participación ciudadana	1. Auto gestión 2. Cogestión 1. Económicos 2. Políticos 3. Ideológicos 4. Otros
2. Los problemas comunitarios	1. Tipos de problemas	1. Identificación de responsables 2. Propuestas de la comunidad
	2. Formas de solución	
CAPÍTULO VI. CONDICIONES DE VIDA		
1. Necesidades básicas	1. Alimentación	1. Estado de nutrición 2. Patrón alimentario familiar
	2. Vivienda	1. Tipo de materiales 2. Tenencia 3. Servicios
2. Servicios básicos	1. Educación	1. Analfabetismo 2. Escolaridad 3. Asistencia
	2. Salud	1. Morbilidad 2. Síntomas y padecimientos 3. Morbilidad por grupos de edad
3. Empleo e ingreso	1. Empleo efectivo	1. Tipo de empleo 2. Horas trabajadas 3. Monto mensual del ingreso

La elaboración del diagnóstico, junto con la de los demás elementos del plan (presentación, introducción, objetivos y estrategias, modelo de programación y programas) dio como resultado 13 planes para promover y orientar el desarrollo de 13 municipios del estado de Chiapas.

SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. CONFLICTO Y FUERZAS SOCIALES, 1996

José Arellano Sánchez*
Margarita Santoyo*

LA SITUACIÓN GENERAL

En los últimos sexenios la política económica de México se ha caracterizado por los diversos cambios que ha sufrido en su estructura económica, los cuales han sido de corte neoliberal con tendencia a adaptarse al modelo de globalización económica, que se concreta, entre otros factores, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La inclinación neoliberal tuvo un fuerte impacto en la sociedad al agudizar las diferencias socioeconómicas que de por sí eran ya muy marcadas entre los diferentes sectores de la población, haciéndose más evidente en los grupos minoritarios. A pesar de que estos grupos fueron igualmente afectados por las medidas económicas implementadas, fue únicamente el sector indígena del estado de Chiapas el que se manifestó en contra de ellas. Población indígena que con todo y los programas de desarrollo social que instrumentó el Instituto Nacional Indigenista (INI) y algunas otras instituciones gubernamentales siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y marginación.

Estas condiciones junto con la firma del TLC provocan la manifestación de protesta de un grupo indígena armado, auto-denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual en su primera "Declaración de la Selva Lacandona" (enero de 1994) llama al pueblo mexicano a alzarse en armas contra el gobierno salinista, a quien considera como el principal

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Agradecemos a las siguientes personas su participación y colaboración, todas ellas integrantes del "Equipo Chiapas": Ma. Ingrid Alonso Gómez, Javier Enciso Pérez, Elvia Mata López, Juana Virginia Núñez Cruz, Graciela Alejandra Trejo Morales, Lucila Bernal Barba y Paul Moreno Montes de Oca.

obstáculo para **lograr** el tránsito a la democracia en el país y **continuar** de los "500 años de explotación de los grupos indígenas"; declarando la guerra al ejército mexicano y manifiesto que la base de su lucha es por trabajo, techo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, justicia y paz.

A medida que se desarrolla el conflicto, la lucha zapatista adquiere nuevos matices: el EZLN depone las armas y llama a la sociedad civil organizada a una lucha pacífica por la democracia a través de la Convención Nacional Democrática.

No obstante, de las negociaciones que se llevan a cabo dentro del estado surgen conflictos entre los diversos actores sociales que **dificultan** la negociación entre gobierno federal y ejército zapatista, como es el antagonismo agrario entre organizaciones campesino-indígenas **oficiales** e independientes—además de las pugnas permanentes contra las instituciones gubernamentales—; la lucha por la tierra entre campesinos y ganaderos; el hostigamiento a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's); los conflictos entre evangélicos y católicos; las agresiones a las mujeres indígenas, etc., **lo** que agudizó la problemática sociopolítica del estado, y **obligó** al gobierno federal a llevar a cabo varias acciones con la finalidad de mitigar el conflicto. Para ello se removió de sus cargos a diversos funcionarios a partir de 1994, llegando a cambiar en cinco ocasiones al gobernador del estado en menos de dos años.

Mientras tanto, el EZLN continúa su lucha pacífica a través de la Convención Nacional Democrática (CND) e invitando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a encabezar dicho movimiento. Sin embargo, el candidato perredista declina la invitación.

A mediados de 1995 el gobierno federal, a través del ejército mexicano, inicia una ardua búsqueda de los líderes zapatistas y realiza una guerra de baja intensidad afectando no sólo a la población indígena militante o no del EZLN, sino también a la población civil **simpatizante** del movimiento. Como respuesta a estas acciones el EZLN lanza una convocatoria a la población de todo el país para llevar a cabo una Consulta Nacional donde la sociedad civil fuera quien decidiera el rumbo que habría de tomar el movimiento zapatista.

A partir de esta consulta el ejército zapatista decide **continuar** su lucha política con la creación de un organismo denominado Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en el que

participen, además del EZLN, todas aquellas organizaciones civiles y políticas que quieran un cambio democrático en la sociedad mexicana sin aspirar al poder.

La correlación de fuerzas entre los distintos grupos que están dentro de este escenario político se ve modificada ante la decisión del EZLN de conformar un Frente, debido a que esto generará una lucha en la aglutinación de simpatizantes ya no sólo para los tres principales partidos políticos del país, sino también para esta nueva fuerza política, ya que a la fecha no existe ninguna otra vertiente política que contemple las demandas de la sociedad y permita una participación amplia de sus miembros.

Otro camino que se vislumbra es que el FZLN, con toda la disposición de no convertirse en partido político, corre el riesgo de caer en una estructura burocrática que a través del tiempo lo coopte y lo convierta en una organización más que sirva al Estado, y deje en un plano secundario las demandas que en un principio motivaron su lucha, debido a que las mismas estructuras de poder buscan el desmembramiento de cualquier organismo opositor.

LAS FUERZAS SOCIALES DEL ESTADO

Se entiende por fuerza social al grupo de individuos que están unidos por intereses económicos, políticos y sociales. En el estado de Chiapas se desarrollan diversos grupos que se aglutinan en dos fuerzas sociales contradictorias. Por un lado se encuentran aquellos grupos que sustentan el poder económico y político, como ganaderos, finqueros y parvifundistas, quienes auspiciados por el partido oficial ven protegidos sus intereses económicos los cuales corresponden a los del gobierno, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC), Antorcha Campesina y Unión de Productores de Café de Ángel Albino Corzo, entre otras.

Por el otro, se reúnen las organizaciones que luchan por la posesión de la tierra y mejores condiciones de vida, en las que se agrupan campesinos, indígenas y obreros, la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, Xi' Nich y otras, las cuales

ven truncada su lucha por diferentes causas, entre ellas la cooptación de dirigentes o la represión. Ello ha llevado a que éstas resulten ineficaces a los reclamos de sus militantes, quienes se separan y fundan nuevas asociaciones y organizaciones para así lograr los objetivos que las originaron, como sucedió con la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones, que se dividieron en "oficial" e "independiente".

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surge como la única alternativa para la solución de los problemas de explotación y condición de pobreza, enfrentándose a la negación de la realidad chiapaneca por parte del gobierno. Es así como el movimiento zapatista viene a ser el detonante de la situación álgida en la que han vivido los indígenas.

A su vez, reactiva las fuerzas sociales que se encontraban pasivas. Ante la ineficacia del gobierno por detener el movimiento armado, los grupos económicamente preponderantes se reagrupan con la finalidad de proteger sus intereses, tal es el caso de la Asociación de Ganaderos de Ocosingo. Asimismo, es la base para que los sectores más explotados de la sociedad chiapaneca y nacional retomen las demandas que enarbolaba el zapatismo y conformen agrupaciones que apoyen esta lucha, como por ejemplo la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) y Movimiento Civil Zapatista (MCZ).

Las diversas organizaciones que se vislumbran en el escenario chiapaneco cuentan con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos de los partidos principales del país (el tercero es el Partido Acción Nacional que cuenta con poca presencia en las organizaciones sociales del estado de Chiapas). La solidaridad que ha manifestado el PRD a las demandas de los sectores indígena, campesino y obrero ha hecho que las organizaciones que aglutinan a los sectores más pobres se encuentren afiliadas a éste. Por su parte el PRI, apoya a las organizaciones que poseen recursos capitalizables.

Dentro de estas organizaciones y su simpatía política se nota una diferenciación en el objetivo a perseguir: mientras unos ven en la tierra el medio de subsistencia, otros sólo la ven como el instrumento para asegurar su posición dentro de la

sociedad. Así, la lucha no es sólo entre los "que tienen" contra los "que no tienen", es de trasfondo una lucha política por el poder.

El EZLN se ha presentado como la fuerza política y social más importante del momento, la lucha que ha realizado no se aboca únicamente a lo regional debido a que las condiciones por las que surgió no son específicas de Chiapas, sino que prevalecen en el país.

CONFLICTOS SOCIALES

El surgimiento del EZLN agudizó los antagonismos de las relaciones sociales entre los diversos grupos que conforman la sociedad chiapaneca. Al añejo problema agrario en el estado se agregan un sinnúmero de conflictos sociales.

En los primeros días de 1994 se presentaron enfrentamientos armados entre el ejército mexicano y el EZLN, los cuales tuvieron como consecuencia el derrumbamiento del mito del último milagro mexicano, es decir la creencia del crecimiento económico que beneficiaba simultáneamente al gran capital y a las mayorías trabajadoras. También se cuestionan las bondades innatas del TLC, así como la forma de proceder del primer mandatario Carlos Salinas.

Ante la manifestación de diversas clases y sectores sociales, Salinas ordena el cese el fuego, dando lugar al diálogo. Llevado a cabo en San Cristóbal de las Casas. Después de la consulta con sus bases sociales, el EZLN rechaza las propuestas gubernamentales de paz. El asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, provocó el lanzamiento de alerta roja por parte del ejército zapatista y el alejamiento de los compromisos de paz de las partes.

Posteriormente la sociedad civil empieza a conformar la resistencia política, en la que se incluye la realización de la Convención Nacional Democrática. La insurgencia civil se manifiesta en las continuas movilizaciones por la democracia y una paz digna, y tiene lugar la Segunda Convención Nacional Democrática en Tuxtla Gutiérrez.

El día 11 de enero de 1995 la CEOIC bloquea la carretera Panamericana durante 13 horas como parte de las acciones de insurgencia civil para exigir la desmilitarización del estado de Chia-

pas, la renuncia de Robledo Rincón y el reconocimiento del gobierno en rebeldía y el Consejo Municipal de Amatenango del Valle.

Algunos de los conflictos sociales van a ser más recurrentes en 1995, como la toma de tierras, desalojos, cierre de carreteras, tomas de alcaldías y edificios públicos, en varios casos motivados por cuestiones electorales.

El 7 de abril de 1995 labriegos armados con machetes y palos de una fracción de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), liderados por el maestro Hernán Villatoro Hernández, se apoderaron violentamente de cinco fincas bananeras ubicadas en Suchiate, Chiapas, expulsando a los jornaleros bajo amenaza de muerte, destruyendo las plantaciones y el sistema de riego. El 28 del mismo mes al menos un centenar de indígenas cubiertos los rostros con paliacates, pasamontañas y armados con viejas carabinas, escopetas, rifles y palos con punta de machete, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata, se apoderaron de la finca cafetalera San Luis "Los Andes" ubicada en la frontera comunitaria Belisario Domínguez.

Las demandas de los campesinos indígenas no se quedan solamente en la dotación de tierras, sino que conforman todo un pliego encaminado a reactivar la productividad en el campo.

El 21 de noviembre de 1995 la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPECH) rompe el diálogo con el coordinador del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Sustentable, Dante Delgado, y desconoce al gobierno que encabeza Julio César Ruiz Ferro, en tanto que campesinos de esa organización bloquean varias carreteras que comunican hacia los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz demandando la solución inmediata a los puntos de carácter agrario, electoral, económico y social.

La insurgencia civil alcanza un plano nacional e internacional, las muestras de apoyo al EZLN se multiplican, pero no son bien vistas por el gobierno, quien ante su incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales opta por la represión.

El 14 de febrero de 1995 es reprimido un mitin de apoyo al EZLN en la ciudad de Toluca por parte de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de esa ciudad, dejando como saldo 20 lesionados.

El 2 de marzo son agredidos estudiantes de la UNAM, UAM y la Universidad Autónoma Chapinigo por los granaderos, al

manifestarse frente a la Sedena para demandar una solución pacífica y negociada en Chiapas.

Varios fueron los grupos sociales y organizaciones en los que repercutió el llamado del EZLN a hacer efectiva la democracia y la justicia. Los signos de apoyo y solidaridad con las comunidades indígenas se hacen patentes, como la caravana por la paz encabezada por el gobernador en rebeldía Amado Avendaño Figueroa, que llegó al Zócalo de la ciudad de México y retornó a Chiapas con víveres y medicamentos, no sin antes haber sorteado los bloqueos llevados a cabo por el aparato de estado al servicio del gobierno, tal es el caso de la campaña de desprestigio de la lucha indígena en los medios de comunicación electrónicos e impresos. Asimismo se manifestó la presencia de grupos contrarios a los postulados del EZLN y los que le han brindado su apoyo. El 21 de febrero de 1995 se realizó un mitin de "Auténticos Coletos" contra Samuel Ruiz, pidiendo su expulsión y el desconocimiento de la Conai.

La AEDPECH informó que se vive un momento de intensa violencia y terror en contra de las organizaciones indígenas y campesinas así como de los candidatos del PRD, y en septiembre de 1995 informaron que en lo que iba del año 60 campesinos miembros de la organización habían sido asesinados, 30 desaparecieron y 150 estaban presos.

La militarización y el clima de inseguridad en el estado de Chiapas han propiciado otros conflictos, como el desplazamiento de comunidades indígenas completas y uno de los grupos sociales más perjudicados ha sido el de las mujeres.

En los últimos doce meses la violencia contra las mujeres se ha incrementado, particularmente en los municipios de Altamirano, San Andrés Larráinzar, Amatenango, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, en donde hasta octubre de 1995 se tienen documentados 50 casos de violación, señaló el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas.

El gobierno mexicano, en su afán por controlar el movimiento campesino, crea organismos y dentro de los oficiales se crean divisiones, así como conflictos sociales por la divergencia de intereses. El 4 de diciembre de 1995 la policía judicial de Chiapas desaloja las oficinas de la ARIC oficial que llevaban 60 días ocupadas por la ARIC independiente.

Los principales conflictos agrarios se encuentran ligados directamente con el sector ganadero, quien posee la mayor parte de las tierras. Tomas de tierras, desalojos, secuestro de ganaderos, bloqueo de carreteras, marchas, mítines, son de los problemas más representativos.

La presión sobre la posesión de la tierra de los diversos grupos responde a intereses económicos y políticos en los que las estructuras de gobierno se encuentran ampliamente rebasadas, por la imposibilidad de dar respuesta a los rezagos de dotación de tierra. Las reformas al artículo 27 constitucional agudizaron la problemática, de tal manera que al darse por terminada la reforma agraria, numerosas comunidades indígenas ancestralmente despojadas optan por las invasiones.

CONFLICTOS RELIGIOSOS

Ante el levantamiento armado del EZLN, autoridades gubernamentales tanto federales como estatales han realizado varias investigaciones, han perseguido, hostigado y encarcelado a la población. Mientras tanto, el poder judicial ha llevado a cabo diversos cateos en busca de armas, equipos de radio-comunicación y de documentos que den a conocer a involucrados del grupo insurgente, además de expulsar a miembros de la Iglesia, en especial de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que han sido objeto de una serie de ataques y de protestas por diversos grupos como la Sociedad Civil Colecta, el Frente Cívico, de ganaderos, etc., ya que consideran que varios integrantes de esta diócesis están involucrados en forma directa o indirecta con el EZLN, por lo que los grupos exigen la renuncia del obispo Samuel Ruiz a la Conai y el abandono de la diócesis.

Por su parte, el gobierno federal ha expulsado del país a tres sacerdotes extranjeros: Rodolfo Izal, Jorge Barón y Loren Riebe, acusados de incitar a los indígenas contra el gobierno, por lo que miles de indígenas de varias parroquias de cinco comunidades realizaron marchas y plantones para exigir a las autoridades municipales el retorno de los tres sacerdotes expulsados. Así también, representantes de la Iglesia católica de tres estados manifiestan un apoyo total al obispo Samuel Ruiz.

Otro problema existente en Chiapas de orden religioso desde hace 28 años son las expulsiones violentas de los grupos indígenas evangelistas de sus comunidades, principalmente en la región de Los Altos y los límites de la selva Lacandona por autoridades municipales, por los caciques y por los católicos tradicionalistas. La mayor parte de los desplazados se han refugiado en colonias y parajes en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Teopisca y otros.

Los líderes nacionales y representantes evangelistas de diversas etnias de Chiapas entregaron un documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que dan a conocer los problemas religiosos existentes en el estado y piden su intervención para la solución de los problemas. El 4 de agosto de 1995 los representantes evangelistas conforman el Consejo Indígena Evangelista de Chiapas para exigir el respeto a la libertad de creencias.

Por otra parte, en San Juan Chamula existe una persecución religiosa por parte de los católicos tradicionalistas contra los evangelistas, lo que ha ocasionado que ambos grupos se hayan armado para defenderse unos de otros, provocando enfrentamientos a tiros, y secuestros. Ante los hechos, la Procuraduría de Justicia del estado y la policía estatal patrullan la zona y ejecutan órdenes de aprehensión a presuntos secuestradores.

Asimismo, indígenas evangelistas expulsados de sus comunidades, especialmente de San Juan Chamula, y representantes de varias organizaciones están dispuestos a dialogar con los católicos tradicionalistas para dar una solución pacífica, justa y duradera al problema religioso, pero con la condición de que los católicos cumplan varias demandas como la aparición de los secuestrados, la militarización del municipio de San Juan Chamula y el castigo a las autoridades municipales por delitos y abuso de autoridad.

Con el problema religioso existente en Chiapas se tiene que tomar conciencia de por qué surgen estos conflictos. Autoridades gubernamentales, las iglesias, los grupos religiosos, las etnias y la población en general deben hacer un consejo en el que pongan a discusión los problemas, y puedan dar una solución pacífica y política para el respeto a la libertad de creencias y evitar la intervención de partidos políticos, así como de asociaciones oficiales y privadas en los asuntos religiosos.

CONFLICTOS POLÍTICOS Y ELECTORALES

Otro problema grave existente en el estado de Chiapas y que afecta el proceso de vida de los chiapanecos es de índole político y electoral. Las gestiones de las autoridades gubernamentales han afectado a la sociedad civil y por otro lado benefician a caciques, productores, comerciantes y a ellos mismos.

El PRD ha promovido una iniciativa de juicio político ante el Congreso estatal contra el ex gobernador Eduardo Robledo Rincón por haber incurrido en violaciones constitucionales en la designación de su gabinete. Así también este partido presentó una demanda penal en contra del secretario general de Gobernación, Erachio Zepeda, por el delito de usurpación de funciones.

Toma de alcaldías y de presidencias municipales son actos violentos en los que la población demuestra su descontento por las irregularidades en las funciones de las autoridades, pidiendo asimismo su destitución; también se presentan enfrentamientos entre partidos políticos por la disputa del poder de las alcaldías y de las presidencias municipales.

El año de 1995, para Chiapas, fue intenso debido a las elecciones que se llevaron a cabo en el mes de agosto para renovar los 111 alcaldías y diputados locales. Fue un año electoral en que no faltaron enfrentamientos entre militantes partidistas, destrucción de paquetaría electoral, toma de alcaldías, de ayuntamientos y de presidencias municipales, de marchas en protesta por fraudes electorales en diversas comunidades, como por ejemplo el municipio de Ocosingo, Comitán de Domínguez, Villa de Comaltitlán, Acpetahua, Soyala, Margaritas, Totolapa, Tila, Nuevo Lamar, entre otras entidades. Hay que destacar que en el municipio de Ocosingo, el más grande del estado, se pospusieron las elecciones por falta de seguridad en los comicios y se creó un Consejo Municipal de consenso que refleje todas las tendencias político-sociales del municipio, hasta convocar de nueva cuenta a elecciones confiables.

La población indígena de los Altos de Chiapas pidió al Congreso Estatal y al Tribunal Electoral la destitución de los responsables, distrital y municipal, del Consejo Estatal Electoral (CEE) de esa zona por las anomalías que se presentaron en la jornada electoral. Otro problema que surgió en los comicios fue el alto grado de abstención de los ciudadanos, que ya no confían en las elecciones. El conflicto político-electoral es un

asunto de suma importancia y de difícil solución, por lo que las autoridades, los partidos políticos y la sociedad civil en general deben participar en las iniciativas públicas que les atañen.

En Chiapas el gobierno debe delimitar parámetros en los que la sociedad y los partidos políticos participen en las decisiones que benefician a la población; por su parte, los partidos políticos deberán obligar a sus candidatos a los diversos cargos políticos a cumplir las promesas que hicieron a sus simpatizantes en las campañas electorales para prevenir descontentos y conflictos sociales; igualmente, la población debe evitar la abstención en las elecciones.

LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE CHIAPAS

Chiapas es sin duda un estado donde los contrastes se hacen más evidentes. La riqueza en recursos naturales contrasta con la pobreza de la mayoría de sus pobladores, ocupando el primer lugar en marginalidad a nivel nacional.

El estado cuenta con una población de 3.2 millones de habitantes distribuidos en 111 municipios,¹ cinco se ubican con baja marginalidad, 12 con media, 56 con alta y 38 con muy alta. Tiene 16 422 localidades, el 75% de las cuales son de un máximo de 99 habitantes, lo que significa una enorme dispersión, con una población joven: 44.2% menor de 15 años y un promedio de edad de 17 años.

El 34% del total de las viviendas tiene un solo cuarto, ocupado por cinco o más personas; el 61% tiene cocina con leña o carbón; una de cada tres viviendas no tiene electricidad, el 56.8% cuenta con agua entubada que se concentra solamente en las ciudades.

El 67.6% de la población es católica y el 16% protestante o evangélica.² La fecundidad es de 2.7 hijos nacidos vivos, el 27% habla lengua indígena, el 30% es analfabeta. El 42.9% de la PEA son activos y el 55.4% inactivos; de éstos, el 58.3% pertenece al sector primario, 11.1% al secundario y 27.4% al terciario. El 19% no percibe ingresos, el 39.9% menos de un salario mínimo y el 21.2% de uno a dos salarios mínimos.

¹ Conapo, *Informe sobre marginación municipal*, México, 1990.

² La zona en que estalló el conflicto es la de más alta población protestante.

Las principales causas de muerte son infecciones intestinales, respiratorias y desnutrición, especialmente en las comunidades indígenas donde se concentra más del 12% de mortandad con 150 niños muertos por cada mil nacidos vivos. La esperanza de vida en promedio es de 44 años.

El consumo diario es menos de 500 calorías, equivalente a la quinta parte del mínimo (2 400), con una monodieta de autossistencia de maíz y frijol, todo ello factores propios de la pobreza y la marginación

SITUACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Chiapas, con una población de 3.2 millones de habitantes, es uno de los estados con el menor índice de escolaridad: 3.9 grados aprobados, es decir, el promedio no alcanza siquiera el cuarto año de la educación básica. Asimismo el registro promedio del grado educativo estatal no nos permite reconocer las enormes diferencias existentes en el interior de las nueve regiones económicas en que se divide el estado. Sería importante dar seguimiento a esta particularidad, sobre todo para reconocer las condiciones existentes en zonas como Los Altos y la Selva, donde se registran los más altos grados de marginalidad y pobreza.

Además, no sería raro asociar el problema del rezago educativo al de la producción y el desarrollo, si se considera que las actividades predominantes en el estado son la agricultura y la ganadería.

En el estado sólo reciben enseñanza en educación básica, preescolar, primaria y secundaria 845 263 personas en edad escolar, 5 a 14 años, es decir el 91% de la población total (930 769) en este mismo rango. En preescolar se atiende al 43% de los niños (112 721); en primaria al 69% de los niños de 6 a 14 años (635 331), y en educación secundaria al 80% de los adolescentes (97 211). Asimismo la deserción y reprobación alcanza al 5 y 14%, respectivamente.

Respecto a la educación media superior en el estado, sólo el 26% de la población entre 15 y 17 años de edad se encuentran realizando estudios en este nivel o en las modalidades de enseñanza normal, especial y de capacitación. Es decir, sólo se atiende a 57 715 personas de un total de 223 969 en este rango de edad.

En el nivel superior el porcentaje es el más bajo de la demanda educativa, ya que sólo atiende al 1.8% de la población (13 363) en edad escolar de un total de 741 110 de la demanda potencial. La matrícula en este nivel se da mayormente en la Universidad Autónoma de Chiapas (más de las dos terceras partes), y el resto en instituciones de Tuxtla Gutiérrez (6), Tapachula (2) y en Comitán y Villaflores (una en cada una).

Un componente más, asociado al problema educativo, son los responsables de la planificación e instrucción escolar, es decir funcionarios y maestros, que por razones de tipo administrativo, económico o político no toman en cuenta las necesidades de la comunidad, lo que origina que se enseñe con base en la expectativa de irse a la ciudad para conseguir mejores condiciones de vida.

Superar el rezago de la educación en todos sus niveles con la implementación del proyecto neoliberal y la descentralización suena casi imposible, pues para ello se requiere una infraestructura que no se ha creado en la última década; hablar de la regionalización de los programas será legítimar la desigualdad; la opción por la globalización cultural ha llevado a promover un estilo de vida ajena a la mayoría de los mexicanos, principalmente en las zonas de más alta pobreza.

LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD

Con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional la mayoría de los mexicanos reflexionamos sobre la vida de pobreza, discriminación y explotación que dentro de las comunidades indígenas padecen las mujeres.

Si quisiéramos mostrar a grandes rasgos lo que significan las mujeres y su situación actual, podríamos partir de cuántas son en la entidad: son 1 352 870, de cinco años o más, de un total de 3.2 millones de habitantes.

Como podemos suponer no todas son indígenas, 356 442 son mujeres pertenecientes a algún grupo étnico que hablan alguna lengua indígena o son bilingües. Estas mujeres efectúan muchas veces más trabajo que el hombre, pero las labores realizadas por ellas se hacen invisibles, desaparecen.

La mujer indígena chiapaneca, como muchas otras, además de encargarse de las labores de la casa acarrea agua, recolecta

leña, cuida niños y ancianos. Estas mujeres tienen poco acceso a la educación, su salario es bajo y en muchas ocasiones debe entregarlo al esposo; no tienen derecho a escoger pareja, no deciden cuándo y cuántos hijos tener, algunas veces son golpeadas no sólo por el marido sino por el suegro, cuñado u otro pariente. No tienen derecho a poseer tierra, sólo los hombres, no tienen cargos dentro de las organizaciones de la comunidad "...nosotras nos hemos organizado por la pobreza, el maltrato y las humillaciones que sufrimos, uno de los problemas más fuertes es que no sabemos hablar ni escribir en español, no conocemos nuestros derechos. Nos engañan..."

En la lucha emprendida por las mujeres indígenas dentro del EZLN y en las comunidades sólo piden justicia, conformándose en nuevos sujetos sociales, no como mujeres ni como pertenecientes a grupos étnicos, sino como seres humanos pensantes, merecedores de participar en las decisiones para mejorar las condiciones de vida dentro de sus pueblos.

La mayoría de esas 356 442 mujeres en la actualidad luchan por participar en la economía, promover la producción, la realización de una verdadera reforma agraria, tener derecho sobre los recursos naturales, realizar acciones para avanzar en el proceso de nuevas políticas de administración de los recursos financieros que sean directamente manejados por los pueblos indios, que no como hasta ahora se creen programas y se destine a recursos para infraestructura, salud, educación, vivienda, préstamos a la agricultura y ganadería y en muchas comunidades ni siquiera llegan a conocer el programa, mucho menos llegan los recursos financieros para efectuarlos.

Éstas son algunas de las luchas que están librando las indígenas de Chiapas además de luchar por su igualdad con el hombre y ser consideradas como el resto de las mujeres del país, no estar en un apartado especial por ser "mujeres indígenas".

Como el resto de la población del país, son capaces de responsabilizarse para efectuar tareas de producción, comparar responsabilidades, tomar decisiones, participar en la economía y llevar adelante programas para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

CONCLUSIONES

Como se ve, intentar un análisis-diagnóstico se torna una tarea compleja, toda vez que el estado de Chiapas se encuentra inmerso en diversos procesos político-sociales cuyo dinamismo es tan alto que contrasta con la aparente calma que durante tanto tiempo gestaría sus causas.

En principio ningún diagnóstico social o político puede olvidar la realidad de la protesta indígena objetivada por el EZLN que irrumpió en 1994. De tal magnitud se considera el impacto político-social, que es factible hablar de Chiapas antes y después de 1994.

En la realidad actual del estado se encuentran activadas diversas fuerzas étnicas, sociales, políticas, militares y hasta religiosas, lo que dificulta y empaña la acción de gobierno. Basta con mencionar que desde hace 20 años el estado ha tenido seis gobernadores interinos, tres en los dos últimos años, incluyendo al actual, que ha sido ratificado como gobernador interino.

Antes de la guerrilla indígena del EZLN el estado presentaba el siguiente perfil sociopolítico:

Imposibilidad de obtención de tierras; problemas por límites interregionales; "olvidos" sociales en la región; atraso del estado, falta de incorporación al desarrollo nacional; deficiente e injusto reparto agrario; violación constante de los derechos agrarios; crecimiento demográfico; descapitalización del campo; migración por conflictos religiosos y políticos; inestabilidad gubernamental y política; existencia de zonas naturales protegidas; la construcción de hidroeléctricas; la actividad petrolera; desplazamiento de tierras agrícolas; creciente actividad ganadera; baja participación del sector secundario y terciario, y prácticas agrícolas de algunos grupos indígenas.

Caracterizado como causa o efecto de un profundo racismo, predomina la discriminación racial, social, cultural y la explotación económica de la fuerza de trabajo, fundamentalmente indígena, pues Chiapas es un estado esencialmente indígena.

A partir de 1994, los gobiernos estatal y federal han enfrentado a un movimiento guerrillero indígena que a dos años de existencia adquiere un perfil de sujeto social y, junto con este nuevo sujeto social, otros más.

Con la transformación del EZLN se posibilita el margen de negociación y acuerdo con el Estado y con la sociedad civil. Sin embargo, la categoría de federalismo a partir de variables relevantes, tales como: soberanía y seguridad nacional, así como de autonomía estatal, son temas que deberán ser abordados bajo nuevos principios sociales y políticos.

El nuevo EZLN es una fuerza capaz de defender los intereses de los indígenas de las seis etnias más grandes del estado. Asimismo, puede constituirse en transformador de las relaciones entre los indios y el Estado nacional a partir de nociones como la autonomía regional indígena.

Las formas tradicionales del indigenismo oficial han agotado una forma de visión del Estado con los indios, no sólo porque las demandas materiales de los indígenas alzados coinciden con los objetivos no cumplidos del indigenismo del Estado, sino porque facilitaron la concentración de tierra, el control social y político a través del fortalecimiento de las estructuras caciquiles y la creación de nuevas formas de dominación política a partir del clientelismo regional.

Las falta de transparencia en el ejercicio del gasto social en un estado con los más altos índices de pobreza, no sólo difunden una imagen impopular del gobierno del estado, sino engendra irritación social.

La realización de obras de infraestructura hidroeléctrica y petrolera a costa de la marginación de la población, causa no sólo descontento y desesperanza sino resentimiento político y puede propagar los movimientos sociales.

La concentración de la tierra y la tendencia al cambio de la vocación agrícola para la ganadería pueden crear no sólo situaciones de pobreza, sino aun de hambre.

El conflicto de las cañadas (hiosafera de Montes Azules), Los Altos y la Selva abarca más o menos con nitidez tres subregiones, pero puede englobar al resto del estado.

La militarización del estado, en especial en las tres subregiones, produce una situación de tensión que semeja una guerra de baja intensidad. La institucionalidad y profesionalismo del ejército mexicano se enmarca entre la línea dura y la progresista.

Después de la emergencia del EZLN en 1994 se multiplicaron las organizaciones locales regionales y estatales, indígenas

y campesinas, independientes y oficiales, que ejercen sobre todo presiones políticas y agrarias.

El gobierno estatal se inserta en las contradicciones con acciones que no siempre tienen el efecto deseado para nadie, como es, por ejemplo, el caso de las indemnizaciones de las tomas e invasiones de tierra.

Las relaciones del Estado con los indígenas (el nuevo "indigenismo") debe considerar la autonomía regional indígena como la base del desarrollo de dichos pueblos.

El alto a la violación de los derechos humanos de la población es uno de los puntos centrales en las relaciones de los indios chiapanecos con el Estado y la sociedad mestiza regional.

El factor religioso tiene dos vertientes: a) la proliferación de sectas religiosas protestantes y evangélicas en el estado, que inciden en una confrontación violenta entre católicos y evangélicos, sobre todo en los municipios de Chamula y San Cristóbal de las Casas y b) la teología de la liberación y la formación de catequistas, principalmente en áreas de influencia del EZLN.

La actividad partidista se inserta en un mar de contradicciones que vive el estado, sin embargo las contradicciones centrales se dan en el PRI y el PRD. La actividad del PAN se considera como tercera fuerza.

Las recientes elecciones municipales se consideraron fraudulentas en varios municipios, PRI y PRD protagonizaron las tomas de alcaldías como forma de protesta política.

La falta de espacios políticos alternativos fuera del partido dominante, PRI, y la confluencia del PRD crea formas locales específicas de gobierno con el "Consejo Municipal" de Ocosingo.

Es posible pensar hoy en la reutilización jurídica de "usos y costumbres" indias en las relaciones sociales de las etnias. El discurso dominante central tiende a minimizar el "conflicto" chiapaneco, sin embargo las acciones militares y de seguridad nacional demeritan su gran preocupación.